



A LA MESA DE LA ASAMBLEA DE MADRID

D. Héctor Tejero Franco, Diputado del Grupo Parlamentario Más Madrid de la Asamblea de Madrid, al amparo de lo dispuesto en los artículos 205 y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate ante el **Pleno de la Asamblea**

Madrid, 9 de marzo de 2022

Dña. Mónica García

La Portavoz

D. Héctor Tejero Franco

El diputado

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. La crisis energética post-pandemia y la necesidad de reformar el mercado eléctrico

Desde principios de 2021 los precios del gas y de la electricidad han venido sufriendo una escalada imparable que está poniendo en peligro la recuperación económica y que afecta, sobre todo, a los ciudadanos más humildes que son los que dedican un mayor porcentaje de sus rentas al consumo energético. Esto tiene lugar en un contexto en el que, ya antes de la crisis energética en la Comunidad de Madrid, encontrábamos que en torno al 23% de la población está en riesgo de sufrir pobreza energética.

En el año 2021, el precio medio de la electricidad en el mercado PVPC fue de unos 111 €/MW, con meses como octubre, noviembre y diciembre en los que ese precio estuvo en torno a los 200 €/MW que son entre 4 y 5 veces superiores a la media de la década anterior.

Las sanciones económicas en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa así como la inestabilidad geopolítica inherente han resultado en una subida de precios generalizados de las materias primas, que se suman a las tensiones inflacionarias que ya veníamos experimentando durante 2021 debido, fundamentalmente, a cuellos de botella y desacoples entre oferta y demanda tras la reconexión del sistema económico posterior a los confinamientos llevados a cabo durante la crisis del COVID-19. Como resultado, además de grandes aumentos en el precio del petróleo y el gas, en lo que respecta a la electricidad estamos viendo precios en el mercado diario de hasta 400 y 500 €/MW, es decir, multiplicando por diez el precio medio de la década pasada.

El responsable fundamental de esta subida de precios de la electricidad es la escalada constante de precios del gas en mercados internacionales desde finales del 2020 y, en mucha menor medida, la subida del precio de la tonelada de CO₂ en el mercado europeo de derechos de emisión respecto a décadas anteriores (impulsado muchas veces por prácticas especulativas de compra-venta de los permisos). En el contexto del mercado de tipo marginalista que determina los precios de la luz en la Unión Europea. Este mercado, supuestamente diseñado para optimizar los precios de la electricidad y las inversiones en infraestructuras, fija el precio de la electricidad diario utilizando la oferta de casación más cara en cada momento. Esto hace que los costes más caros se trasladen al precio de todas las ofertas de electricidad independientemente de sus costes.

El principal resultado de este mercado marginalista es que la gran mayoría de empresas y hogares sufren precios de la luz mucho más altos de lo que cuesta producirla. Sin embargo, al mismo tiempo que la mayoría de la población afronta precios récords de la electricidad, las grandes empresas eléctricas obtienen enormes beneficios adicionales a partir de todas aquellas fuentes de energía que se pagan en el mercado muy por encima de su coste.

En 2021, mientras los hogares y empresas pagaban, en promedio, el doble que en años anteriores, Endesa, Iberdrola y Naturgy obtenían 2.000 millones adicionales ese mismo año.

La subida constante del precio de la electricidad durante el último año demuestra que es necesario una reforma en profundidad del mercado eléctrico y de su sistema de fijación de precios que lo desacople de la alta volatilidad de los precios del gas, lo adapte mejor a las nuevas tecnologías renovables y a las necesidades de la transición ecológica, favoreciendo la electrificación y trasladando los bajos costes de las energías renovables a la factura de hogares y empresas españolas.

2. La invasión de Rusia y la necesidad de aumentar la soberanía energética

La invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa el pasado 24 de febrero vino precedida de un largo trabajo diplomático por parte de la Unión Europea (UE) para tratar de disuadir, sin éxito, de sus objetivos a Vladimir Putin, máximo responsable de la invasión. Igualmente, como consecuencia de la invasión, la Unión Europea ha establecido, de forma rápida y coordinada, una serie de sanciones económicas con el objetivo de forzar a Rusia a negociar un alto el fuego, la retirada de sus tropas y el respeto a la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

Con todo, tanto la actividad diplomática previa como las sanciones posteriores se han visto limitadas en su alcance por la gran dependencia energética que la Unión Europea tiene de Rusia, de la que importamos en torno al 25% del crudo petrolífero y el 40% del gas natural que consumimos. Este flujo de importaciones no se ha detenido durante la invasión, al contrario, debido al alza de precios y a la previsión de que suban aún más, el 3 de marzo, una semana después de que empezase la invasión, Europa importó 660 millones de euros en gas ruso, 3 veces más que a principios de año.

La dependencia es mutua. Rusia exporta el 72% del gas natural y el 60% de sus productos petrolíferos a la Unión Europea, de manera que una reducción de las importaciones de gas y petróleo serían una de las sanciones económicas más importantes.

Por supuesto, la dependencia energética respecto a Rusia no es uniforme. Así, mientras que Alemania importa el 65,2% del gas que consume desde Rusia, Polonia el 54,8%, Italia el 43,2%, y países como Letonia o República Checa dependen al 100% del suministro ruso. España es uno de los países que menos depende del gas ruso ya que, según la Corporación De Reservas Estratégicas De Productos Petrolíferos (CORES), importamos de allí sólo en torno a un 10% del gas que consumimos.

La Unión Europea no alcanzará su soberanía política y su autonomía estratégica si no aumenta su soberanía energética e industrial. El camino de la UE para ser un actor clave en la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la sostenibilidad ecológica en el mundo no pasa por una ampliación de sus capacidades militares en el marco de espirales belicistas peligrosas, si no por reforzar independencia energética y asentarse como una potencia tecnológica e industrial.

En esto, España puede jugar un papel clave, dada su menor dependencia del gas procedente de Rusia y su inigualable posición geográfica para el uso de las energías renovables. La Comunidad de Madrid, en tanto que es la comunidad autónoma con mayor PIB de España debe tomar la iniciativa y aumentar sus esfuerzos, en línea con lo planteado por la Comisión Europea.

3. La crisis climática

La crisis energética post-pandemia y la crisis geopolítica derivada de la invasión rusa se superponen a la crisis climática, la más importante a medio y largo plazo. El pasado 28 de febrero, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó la segunda parte de su Sexto Informe (AR6), correspondiente a los impactos, adaptación y la vulnerabilidad, se publicó el pasado 28 de febrero. En ella, el IPCC destaca, entre otras cuestiones, que la región del mediterráneo es una de las zonas más golpeadas por el avance del cambio climático: la temperatura ha subido ya 1,5°C, frente a los 1,1°C de media globales, se espera una reducción del 4% en la precipitación por cada grado que aumente la temperatura y, en función de la reducción de emisiones que se adopte en los próximos años, los recursos hídricos podrían reducirse hasta en un 20%. Este nuevo informe insta a los gobiernos, de la misma forma que llevan instando durante décadas las organizaciones ecologistas, los estudios científicos y los informes resultantes de las cumbres del clima; a tomar medidas urgentes y contundentes para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, y evitar así que la temperatura del planeta supere los 1,5° C por encima de la temperatura preindustrial.

4. Medidas a corto plazo y el Plan RepowerEU

El Gobierno de España ha tomado una serie de medidas para contener las subidas del precio de la luz. Desde junio de 2021, el IVA de la electricidad se encuentra en el 10% y tanto el Impuesto Especial sobre la Electricidad como el Impuesto al Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) siguen en los mínimos legales permitidos. Adicionalmente, el pasado mes de septiembre el Gobierno de España implementó el mecanismo de minoración del exceso de retribución del mercado eléctrico debido al elevado precio del gas. Igualmente se encuentran actualmente en tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados dos medidas adicionales: el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y Proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO₂ no emitido del mercado eléctrico. Sin embargo, a la vista de los precios alcanzados a finales de 2021 y especialmente tras la invasión rusa, estas medidas son manifiestamente insuficientes.

En este contexto el pasado 8 de marzo, la Comisión Europea presentó el plan *REPowerEU* para reducir la dependencia del gas ruso, acelerar el despliegue de las energías renovables y reducir el impacto de la crisis energética en los consumidores. La Comisión establece con claridad en ese plan las recomendaciones para establecer de forma temporal una regulación de precios de la electricidad en el mercado minorista así como impuestos a los beneficios de las eléctricas para reducir el coste de la

electricidad. En la misma línea se manifestó el pasado 6 de marzo la Agencia Internacional de la Energía (AIE) recomendando a los Gobiernos establecer impuestos que recorten los beneficios extraordinarios de las grandes empresas eléctricas, que estiman podrían llegar a ser de unos 200.000 millones de euros en 2002 en la Unión Europea.

En este triple contexto de crisis energética, falta de soberanía energética y crisis climática es necesario que el Gobierno de España tome medidas que aseguren un precio justo para las y los ciudadanos y una rentabilidad razonable para las empresas energéticas, a través de regulación de precios e impuestos a los beneficios desorbitados. Igualmente, es necesario avanzar en la transición ecológica hacia un modelo sostenible y no basado en combustibles fósiles, para lo cual el Gobierno de España debe actualizar los objetivos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, en primer lugar debe impulsar una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, como la que ya tienen otras comunidades autónomas como Baleares o Cataluña, que actúe como marco normativo para una transición ecológica ambiciosa y socialmente justa. Además, debe actualizar el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios Públicos de la Comunidad de Madrid para darle una mayor dotación económica y revisar al alza sus objetivos de eficiencia energética, de descarbonización y de instalación de energías renovables para autoconsumo del edificio y para compartir la electricidad sobrante con los vecinos de los alrededores.

Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Más Madrid propone la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno de España a:

1. Establecer de forma temporal un mecanismo de regulación de precios en el mercado minorista que establezca una rentabilidad razonable para las fuentes de energía no dependientes del gas, desacoplando el precio de la electricidad de la volatilidad del gas.
2. Reformar el mecanismo de minoración del exceso de retribución del mercado eléctrico aprobado en el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, con el objetivo de aumentar sus ingresos y destinarlos a reducir los costes fijos en la factura eléctrica.
3. Revisar al alza los objetivos de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a poner en marcha en el presente ejercicio presupuestario las siguientes medidas:

1. Impulsar una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica de la Comunidad de Madrid con objetivos de descarbonización y eficiencia ambiciosos y en línea con la mejor ciencia disponible.
2. Actualizar el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios Públicos de la Comunidad de Madrid para aumentar su dotación económica y aumentar sus objetivos de ahorro energético e instalación de fuentes de energía renovable.